

La materia de Educación para la Ciudadanía se basa en los principios constitucionales y en la Carta de los Derechos Humanos

CC.OO. comparte el fallo del Supremo sobre la Educación para la Ciudadanía y recuerda que las leyes deben cumplirse

Esta materia forma parte de la organización de las enseñanzas establecidas en la LOE y fue aprobada en su día democráticamente

28.01.09

La Federación de Enseñanza de CC.OO de Castilla y León se congratula de la decisión del Tribunal Supremo en referencia a la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por los beneficios y garantías que supone para el alumnado de nuestra comunidad autónoma. Porque envía un mensaje claro al Gobierno de Castilla y León para que abandone su política de ambigüedad en relación con esta asignatura que tan directamente atañe al ámbito educativo. Por ello, queremos hacer las siguientes manifestaciones:

- No se puede cuestionar el deber, el derecho y la legalidad de educar para la ciudadanía, tal y como lo recoge la Ley Orgánica de la Educación. Ante una ley aprobada democráticamente en el Parlamento Español no se puede plantear su incumplimiento. Anteriormente a esto, el Gobierno español apoyó una recomendación del Consejo de Europa en 2002 y en 2004. España se sumó a una resolución de la ONU en este mismo sentido.
- Creemos que esta materia debería tratarse preferentemente de forma transversal, aunque siempre hemos defendido la inclusión de sus contenidos en el currículo y de una forma más específica en la función tutorial.
- Para conseguir los objetivos de Educación para la Ciudadanía es preciso que el centro, y por tanto sus espacios, horas lectivas y extraescolares, actividades, etc. sea también una referencia en vivencias de valores cívicos y democráticos.
- No acudir a las clases de Educación para la Ciudadanía atenta contra el derecho a la educación y debe tener el mismo tratamiento que cualquier otro caso de absentismo escolar.

Las medidas cautelares adoptadas por el TSJ de Castilla y León deberán anularse y por lo tanto la Junta de Castilla y León tendrá que aplicar la LOE tal y como ha sido refrendado por el Supremo con su fallo judicial.